



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Fabio Alberto Pineda Rodríguez
DEMANDADO	Municipio de Copacabana
RADICADO	05-088-31-05-001-2020-00024-01
TEMA	Pensión convencional
DECISIÓN	Revoca sentencia

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 094** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por el señor **FABIO ALBERTO PINEDA RODRÍGUEZ** contra el **MUNICIPIO DE COPACABANA**, con radicado 05-088-31-05-001-2020-00024-01.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos del poder otorgado por el señor **HECTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO**, alcalde del municipio de **COPACABANA**, visible en el pdf “*04PoderMunicipioCopacabana*”, se le reconoce personería para actuar a la abogada **MILDRED ALEJANDRA CASTRILLÓN ZULUAGA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1.016.001.593 y tarjeta profesional 204.128 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente en el presente proceso los intereses del ente municipal.

• **PRETENSIONES:**

El demandante pretende se declare y se condene al municipio de Copacabana a la pensión convencional, al pago de las mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación y costas del proceso.

- **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones se sustentan en los hechos siguientes: que viene laborando al servicio del municipio de Copacabana desde el 31 de octubre de 1988 mediante contrato a término indefinido, completando más de 30 años de servicio. Que nació el 28 de mayo de 1965. Que la convención colectiva de trabajo suscrita entre Sintrasema Subdirectiva Copacabana y el Municipio, contempla la pensión convencional de jubilación con más de 20 años de servicio y 50 años de edad. Que el 31 de mayo de 2019 realizó reclamación de pensión convencional de jubilación, siendo negada mediante resolución 963 del 25 de junio de 2019. Que se interpuso el recurso de ley, siendo resuelto mediante acta 179 del 26 de septiembre de 2019, encontrándose agotada la vía gubernativa.

- **CONTESTACIONES:**

**Municipio de Copacabana:** Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones elevadas en su contra, al advertir que, para el 31 de octubre de 2010, el demandante tenía 45 años de edad y 21 años de servicios en la administración municipal de Copacabana, por lo que no es beneficiario de la pensión de jubilación por convención colectiva, conforme las exigencias del acto legislativo 01 de 2005.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 9 de febrero de 2022 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello **ABSOLVIÓ** al municipio de Copacabana de la totalidad de las pretensiones instauradas en su contra; **CONDENÓ** en costas procesales al demandante, fijó agencias en derecho en la suma de \$200.000. Como sustento de su decisión, señaló que, si bien el demandante acreditó 20 años de servicio en 2008, lo cierto es que los 50 años de edad lo cumplió en 2015, esto es, por fuera del término indicado por el acto legislativo 01 de 2005, esto es, 31 de julio de 2010.

- **CONSULTA:**

Por no haber sido objeto de apelación la sentencia y ser esta completamente desfavorable a los intereses del actor, se remitió el expediente al Tribunal para conocer del proceso en grado de consulta.

- **ALEGATOS:**

No fueron presentados por las partes.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Solicita el demandante se le reconozca la pensión de jubilación establecida en la Convención Colectiva de Trabajo, las mesadas pensionales, intereses moratorios y/o indexación y costas del proceso; por su parte el municipio de Copacabana manifestó que el actor no cumple con los requisitos para ser beneficiario de la pensión de jubilación de conformidad con las exigencias del acto legislativo 01 de 2005; finalmente, el juzgado del conocimiento negó las súplicas de la demanda.

Atendiendo a que la sentencia se conocerá en grado jurisdiccional de consulta, el problema jurídico que resolverá esta Sala se circunscribe en los siguientes temas: *i)* beneficios convencionales como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005; *ii)* definir si se encuentran acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión convencional; y, *iii)* costas procesales.

***i) Beneficios convencionales como consecuencia de lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005***

Se encuentra acreditado con la prueba documental obrante en el expediente, además de ser reconocido por la demandada, que el señor Fabio Alberto Pineda Rodríguez viene laborando con el municipio de Copacabana desde el 31 de octubre de 1988, en calidad de trabajador oficial.

El actor es beneficiario de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el municipio de Copacabana y el Sindicato Sintrasema Subdirectiva Copacabana 1997-1998, información que se desprende del certificado visible en la página 49 del PDF 01.

A través de resolución 963 del 25 de junio de 2019<sup>1</sup>, la demandada le negó al actor el reconocimiento de una pensión convencional, al considerar que este acreditó los 50 años de edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, no cumpliendo con las exigencias del acto legislativo 01 de 2005.

Ahora bien, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que empleadores y organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones, pero a fin de no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, se reguló en el párrafo 3º un período transitorio, así:

*“Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.”*

De lo anterior se deducen dos postulados diferentes: *i*) para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendrá hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo; y, *ii*) para aquellas convenciones que se establecieran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes. Frente al primer postulado, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que<sup>2</sup>:

*“con base en esta lectura del párrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.”*

Expuso la Corte que la expresión “*término inicialmente pactado*” aludía al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que “*si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara*”, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010. Y

---

<sup>1</sup> Páginas 25 a 31 PDF “01ExpedienteDigitalizado”

<sup>2</sup> Sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en sentencias CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019.

que, con ese alcance interpretativo podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010.

Tal criterio varió en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y SL2986-2020, dándose un alcance diferente al parágrafo 3º del Acto Legislativo 01 de 2005, al considerarse de una parte que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio 2010, y de otro lado que ese plazo también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 de julio de 2005. Al respecto se indicó en la primera de estas sentencias:

*“En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá **por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo** cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010...”* negrilla fuera de texto original.

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, al estudiar la compatibilidad de las recomendaciones del Comité del Libertad Sindical adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT, relativas a que el gobierno colombiano debía adoptar *“las medidas necesarias a fin de que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento”*, sostuvo:

*“La primera recomendación que la OIT dirige al gobierno colombiano consiste en que se **mantengan hasta su vencimiento** los efectos de las convenciones y pactos colectivos cuyo término **haya sido fijado para una fecha posterior al 31 de julio de 2010**. Esto es exactamente lo que establece la primera parte del parágrafo transitorio tercero cuando indica que “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, **se mantendrán por el término inicialmente estipulado**”. Lo anterior se traduce en que el Acto Legislativo no está desconociendo los derechos adquiridos en materia pensional derivados de pactos y convenciones colectivas. Y está siguiendo lo establecido en el artículo 58 Superior, así como en la jurisprudencia constitucional, especialmente lo señalado en la Sentencia C-314 de 2004.*

*[...] Además, como se indicó en precedencia, también con el parágrafo transitorio tercero se respeta incluso la expectativa legítima de aquellos trabajadores que, si bien no cumplían requisitos a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, sí se encontraban cobijados por pactos o convenciones colectivas celebradas antes del 29 de julio de 2005 y con fecha de vencimiento posterior al año 2005 o, incluso, al 31 de julio de 2010 fecha límite fijada por el constituyente. Éstos tenían una legítima expectativa de ser pensionados de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron **mientras continuara vigente**, y así lo reconoce la norma constitucional al establecer que seguirán rigiendo hasta el término de su vencimiento.*

*Esto es justamente lo que está recomendando el Comité Sindical de la OIT, que las pensiones convencionales que contengan reglas de carácter pensional mantengan sus efectos hasta la fecha de su vencimiento. En últimas, que se respeten los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, que es lo mismo que garantiza el Acto Legislativo 01 de 2005 tanto en el Parágrafo transitorio segundo como en el tercero, en los que establece una regla para derechos adquiridos y también una*

*regla de transición para garantizar que se satisfagan las expectativas legítimas de pensión.*

*Y todo lo anterior, garantiza también la protección de la negociación colectiva en cuanto no ignora lo hasta ese momento negociado y decidido en un contexto de libertad sindical". (Negrillas fuera de texto original).*

De lo anterior se colige que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubre un período superior al 31 de julio de 2010, debe respetarse al ser voluntad de las partes otorgar mayores garantías a las normas jubilatorias.

Así lo consideró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al rectificar el criterio adocinado en las sentencias SL2798-2020, SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020. Y a partir de la sentencia SL3635-2020, precisó que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cubre un periodo superior al 31 de julio de 2010

*"debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010.*

*Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o bien porque hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia.*

*Ello, porque tal como tantas veces lo ha dicho esta Sala, la convención colectiva de trabajo es una verdadera fuente de derechos y obligaciones por lo menos durante el tiempo en que la misma o algunas de sus cláusulas conserven su vigencia, de modo que su ámbito de protección cubre los derechos consolidados y trasciende a las expectativas que eventualmente se alcancen durante el término pactado."*

Se recalca, como a partir de esta última sentencia la Sala Laboral de la Corte rectificó parcialmente su criterio en materia de pensiones consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, de modo que las pautas que regulan actualmente el asunto son las siguientes:

*"a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado.*

*b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no*

*presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.*

*c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.”*

En el presente asunto el demandante pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrado en la convención colectiva de trabajo 1997-1998, cuya vigencia inicial está consagrada en la cláusula 7º, que dispone:

*“La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir del 1ro. de enero de 1997 al treinta y uno de diciembre de 1997 y en la segunda vigencia corresponderá desde el 1ro. de enero de 1998 al treinta y uno de diciembre de 1998”*

Asimismo, la cláusula 25 de la convención colectiva regula las reglas para la pensión de jubilación solicitada, así:

**“ARTÍCULO 25. JUBILACIÓN**

*El Municipio reconocerá la pensión de jubilación de los trabajadores de este, cuando ellos cumplan o hayan cumplido cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos.*

*Parágrafo: Esta jubilación se reconocerá y se pagará con el ochenta por ciento (80%), del salario promedio liquidado con base al último salario devengado por el trabajador y cuando el seguro social o cualquier fondo de pensiones asuma el pago de la pensión, el Municipio pagará la diferencia que llegare a existir entre el valor que reconozca el ISS u otro fondo y el que paga el Municipio hasta cubrir ese ochenta por ciento (80%). Este parágrafo tendrá vigencia a partir del 1ro. de enero de 1996”.*

De otro lado, de la prueba documental obrante en el expediente, se desprende que la Convención Colectiva de Trabajo 1997-1998, la cual cuenta con su respectivo sello de depósito ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social hoy Ministerio de Trabajo, estableció su vigencia general de dos (2) años contados desde el 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre del mismo año y desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1998 (páginas 50 a 69 del PDF “01ExpedienteDigitalizado”); asimismo, se evidencia que esta no fue objeto de denuncia, de manera que por efecto del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo se prorrogó automáticamente por períodos sucesivos de seis meses.

Así las cosas, evidenciándose que el demandante es beneficiario de la convención colectiva de trabajo a la que se ha hecho referencia, se hace necesario resaltar acerca del límite temporal de que trata el acto legislativo 01 de 2005, disposición que en su parágrafo transitorio 3º señaló: “Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en

*pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”*

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es de la posición pacífica que el derecho a la pensión convencional se causa una vez se acredita con el tiempo de servicios, mientras que el requisito de la edad solo es una exigencia para su disfrute. Ello conlleva a que, en aquellos casos en que el tiempo de servicios se cumplió con anterioridad al 31 de julio de 2010, pero la edad se acreditó con posterioridad a esta fecha, da lugar al reconocimiento de la pensión extralegal, por haberse causado con anterioridad al límite de que trata el citado acto legislativo. Así se pronunció tal corporación en sentencias SL289-2018, SL722-2019, SL3587-2020, SL5178-2020, SL2507-2022 y SL524-2023, señalando en esta última, lo siguiente:

*“Ahora, respecto de la interpretación de la citada estipulación convencional, le asiste razón al demandado en cuanto afirma que la Sala de Casación Laboral sentó su posición respecto del tema en la sentencia CSJ SL526-2018, dejando fuera de toda discusión que la aludida pensión extralegal tiene como requisito de causación haber prestado veinte (20) años de servicio a la empresa y la desvinculación del trabajador, y que la edad fue establecida como una condición de exigibilidad, es decir para el goce o disfrute de la prestación:*

*Pues bien, preliminarmente habrá que decir para resolver la controversia propuesta en el recurso es que para la Sala fluye indubitable que la redacción del artículo 41 convencional en estudio, particularmente en su Parágrafo 1º, desde su vista gramatical, sistemática y teleológica o finalística no tiene más que una lectura: 1) que se aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo de marras perdieron la condición de trabajadores activos; 2) que para la estructuración del derecho pensional se exige haberse prestado cuando menos veinte (20) años de servicio a la citada empresa; y 3) que el disfrute o goce de la prestación se produzca cuando se arriba por el ex trabajador a la edad de cincuenta (50) años, si se es mujer, y de cincuenta (55) años, si se es hombre.*

*Esto último habrá de resaltarse por constituir el meollo del asunto, ya que en criterio de la Corte, y tal cual lo alega el recurrente, la edad pensional no se acordó en la aludida disposición como una exigencia concurrente con la calidad de trabajador activo de la empresa, por ende, como un requisito para la estructuración del derecho sino apenas como una condición para su exigibilidad, goce o disfrute.*

*[...]*

*Ante tal situación lo que fuerza concluir es que los requisitos de la pensión así prevista se reducen a dos: la prestación de servicios durante un determinado tiempo, para este caso 20 años, y la desvinculación del trabajador por cuenta propia o por causa imputable a la empresa; y la edad indicada en la norma deviene en una condición personal o individual que lo que permite es la exigibilidad del derecho pensional.*

*Es totalmente entendible la anterior afirmación si se observa que el cumplimiento de la edad pensional en estos casos resulta totalmente indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, dado que para el momento en que el ex trabajador cumple la edad establecida en la norma pensional convencional se requerirá que la relación laboral haya perdido su vigencia.*

*Nótese a ese respecto que la disposición convencional parte del presupuesto de que el trabajador ya ha cumplido la materialidad laboral que le da causa a la*



*prestación pensional: el tiempo de servicios, pero considera la circunstancia que impide al trabajador acceder a la pensión conforme a la regla general, la del cumplimiento de la edad pensional en vigencia de la relación laboral, por tanto, toma tal circunstancia como condición necesaria para el reconocimiento del derecho, esto es, que ya no exista vinculación laboral, o por causa imputable a la empresa o por iniciativa del propio trabajador, para de allí señalar que el acceso a la prestación se producirá cuando cumpla la edad de cincuenta (50) años, si es mujer, o cincuenta y cinco (55) si es hombre, lo que es tanto como decir que con el cumplimiento de las dos condiciones iniciales se tendrá el derecho, pero su goce o disfrute solo se producirá al cumplimiento de la última, la anotada edad.*

*Así, la edad considerada en la estipulación convencional fluye indiferente a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, por exigir ésta que tal ocurrencia se produzca cuando el ex trabajador ya no se encuentra amparado directamente por ella, resultando que, de una parte, éste hubiere perdido la condición de trabajador de la empresa; y de otra, que sea en un todo posible que ni siquiera la disposición convencional para ese nuevo momento mantenga vigencia en el marco de las relaciones contractuales de la misma empresa. De ese modo, en forma alguna puede concluirse que la dicha edad sea requisito de estructuración del derecho, sino apenas de su exigibilidad, de su goce o disfrute.*

*Entonces, siendo que los supuestos de hecho del derecho pensional aquí estudiado están limitados a la desvinculación del trabajador y la prestación del tiempo mínimo de servicio, pues la fecha del cumplimiento de la edad allí prevista es ajena a la vigencia de la convención colectiva de trabajo, las únicas exigencias que lo estructuran o definen, que entiende la Corte deben producirse en el término de vigencia de ésta son las ya indicadas: desvinculación voluntaria o forzosa del servicio y tiempo del mismo. En tanto, la fecha del cumplimiento de la edad es de orden individual o particular, sin incidencia alguna en razón de la vigencia de la convención colectiva de trabajo, pues únicamente está atada a la situación particular del ex trabajador. (Subrayas de la Sala)”*

Así las cosas, acogida la interpretación del órgano de cierre, no es acertada la decisión tomada por el juzgado del conocimiento, esto es, que no se causó el derecho a la pensión convencional por acreditarse el requisito de la edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, límite temporal impuesto por el acto legislativo 01 de 2005.

## ***ii) Causación de la pensión de jubilación convencional***

Para entonces esta Sala del Tribunal a estudiar el caso concreto, a fin de determinar si el señor Pineda Rodríguez causó el derecho a la pensión de jubilación convencional.

Como se indicó anteriormente, los requisitos de que trata la cláusula 25 de la convención colectiva de trabajo para tener derecho a la pensión pretendida son los siguientes: *i)* cincuenta (50) años de edad; *ii)* (20) años de servicios continuos o discontinuos.

Con relación al tiempo de servicios, del contenido de la resolución 963 del 25 de junio de 2019, el municipio de Copacabana reconoce que el actor se ha desempeñado en calidad de trabajador oficial desde el 31 de octubre de 1988 y que para el 31 de julio de 2010 contaba con 45 años de edad y 21 años de

servicio al municipio. Asimismo, del certificado visible en la página 19 del pdf 01, se lee que el demandante laboró del 31 de octubre de 1988 al 31 de julio de 2010 un total de 7831 días, equivalente a 21.75 años.

Respecto a la edad, del registro civil de nacimiento de la página 17 del PDF 01, se desprende que el señor Pineda Rodríguez nació el 28 de mayo de 1965, por lo que arribó a los 50 años de edad el mismo día y mes de 2015.

El juzgado de instancia negó el reconocimiento de la pensión convencional al considerar que el requisito de la edad se acreditó con posterioridad al 31 de julio de 2010; sin embargo, como se explicó con anterioridad, la edad es un requisito de exigibilidad de la prestación, mas no de causación.

Atendiendo a las consideraciones expuestas, la sentencia que se revisa por vía de consulta merece ser **REVOCADA**, toda vez que el demandante causó el derecho a la pensión de jubilación convencional con anterioridad al límite temporal impuesto por el acto legislativo 01 de 2005, ya que acreditó 20 años de servicios en octubre de 2008.

Ahora bien, con relación a la fecha a partir de la cual se le reconocerá la prestación, se hace necesario aclarar que los 50 años de edad los cumplió el 28 de mayo de 2015, por lo que en un principio podría considerarse que es desde este momento que debe reconocerse el pago de la pensión; sin embargo, toda vez que el demandante confiesa que actualmente se encuentra vinculado con el municipio de Copacabana, la pensión convencional solo se le reconocerá a partir del día siguiente en que se desvincule de esta.

Con relación al monto de la prestación, el parágrafo de la cláusula 25 de la convención colectiva de trabajo señala que se pagará con el 80 % del salario promedio liquidado con base al último salario devengado por el trabajador; no obstante, como el actor sigue vinculado a la entidad, será esta la encargada de liquidar la pensión de conformidad con la normatividad aludida.

En lo que respecta a los **intereses moratorios**, es claro que estos fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo por la obligación que tiene la entidad de seguridad de reconocer las mesadas pensionales oportunamente; sin embargo, opera frente aquellas pensiones reconocidas con sujeción a dicha normatividad, dejando por fuera las que tienen su origen en convenciones colectivas de trabajo. Además, debido a que el pago de las mesadas está condicionada al retiro del servicio del trabajador oficial,

actualmente no se evidencia retardo alguno por parte de la entidad. Tampoco procederá la indexación de las condenas, por no adeudarse mesada alguna.

**iii) Costas procesales**

Por revocarse íntegramente la sentencia, las costas procesales de ambas instancias quedan a cargo del municipio de Copacabana y en favor del demandante de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 365 del Código General del Proceso. Con fundamento en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Se **REVOCA** la sentencia absolutoria que se revisa por vía de consulta, de fecha y procedencia conocida.

**SEGUNDO:** Se **DECLARA** que al señor **FABIO ALBERTO PINEDA RODRÍGUEZ** le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a cargo del **MUNICIPIO DE COPACABANA**.

**TERCERO:** Se **CONDENA** al **MUNICIPIO DE COPACABANA** a reconocerle y pagarle al demandante la pensión de jubilación convencional a partir del día siguiente en que este se retire del servicio de la entidad pública. Pensión que deberá ser liquidada por la demandada, de conformidad a las motivaciones expuestas en esta providencia.

**CUARTO:** Se **ABSUELVE** al **MUNICIPIO DE COPACABANA** de las demás pretensiones incoadas en su contra.

**QUINTO:** Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

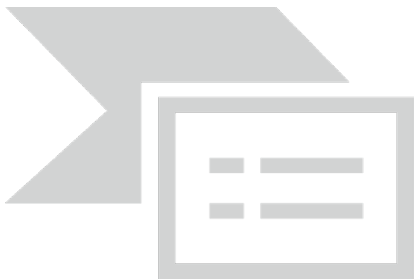
Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**

  
**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTES	Fabio Alberto Pineda Rodríguez
DEMANDADO	Municipio de Copacabana
RADICADO	05-088-31-05-001-2020-00024-01
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 14 de abril de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 14 de abril de 2023 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
SECRETARIO